

Misión de Observación del proceso de selección de los nuevos miembros de la Corte Suprema de Honduras

(English version follows)

Del 29 de septiembre al 3 de octubre, Katya Salazar, Directora de programas de DPLF, participó en una misión de observación del proceso de selección de los nuevos miembros de la Corte Suprema de Honduras. La misión fue organizada por la Comisión Internacional de Juristas (ICJ) y estuvo integrada además por Eduardo Cifuentes, ex Defensor del Pueblo de Colombia, ex presidente de la Corte Constitucional de ese país y actualmente decano de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes; Thomas Roerdam, Magistrado de la Corte Suprema de Dinamarca; y Ramón Cadena, Director para Centroamérica de la Comisión Internacional de Juristas.

El mecanismo de selección de los miembros de la Corte Suprema hondureña es *sui generis*, pues involucra a diversos sectores de la sociedad en el proceso. El mecanismo consta de varias etapas: una primera a cargo de siete (7) “Entes Proponentes”, que en representación de la Corte Suprema, sociedad civil, colegio de abogados, empresa privada, claustros de profesores de las facultades de derecho, trabajadores, y el Comisionado de Derechos Humanos (ombudsman), elaboran cada uno una lista con sus veinte (20) candidatos.

En una segunda etapa, la “Junta Nominadora” (compuesta por 7 miembros titulares, en representación de cada ente proponente) evalúa y depura esas listas (que en total incluyen 120 candidatos) así como las auto-postulaciones (posibilidad reconocida constitucionalmente¹) y elabora una nueva lista de cuarenta y cinco (45) candidatos que es enviada al Congreso para que este proceda a la selección de los quince (15) nuevos miembros de la Corte Suprema. La propia ley que crea este mecanismo de selección dispone la manera en que los representantes de los Entes Proponentes ante la Junta Nominadora, así como los candidatos a magistrados de la Corte Suprema deberán ser seleccionados y las fechas en que las listas deberán ser entregadas.

La misión reconoce los aspectos positivos del mecanismo diseñado por el legislador hondureño, en especial por su intención de incorporar a diferentes sectores de la sociedad en la elección de sus

¹ El día jueves 9 de octubre –último día para presentar auto-postulaciones- la Junta Nominadora informó que había recibido 108 auto-postulaciones, con lo que la cifra de candidatos que deberá evaluar antes del 23 de enero del 2009 asciende a 248.

más altas autoridades. Sin embargo, la misión recibió información de diversas fuentes acerca de presuntas irregularidades en la elaboración de algunas de las listas y de presuntos acuerdos políticos que ya estarían llevándose a cabo y que de ser ciertos, solo erosionarían el proceso de selección. La misión pudo comprobar que existe mucha desconfianza en que las listas de candidatos hayan sido preparadas sin presión alguna de parte de los partidos políticos y/o de algunos grupos con intereses particulares.

Además, se pudo comprobar durante la misión que dicho mecanismo de selección no había sido aun reglamentado por la Junta Nominadora, a pesar de la cercanía de las fechas límite (la fecha límite para que la Junta Nominadora entregue la lista de 45 candidatos al Congreso es el 23 de enero, siendo la fecha de designación por el Congreso, el día 25 del mismo mes). Frente a esto, los miembros de la misión fueron claros en recomendar a la Junta Nominadora que a la brevedad posible estableciera su reglamento de actuación.

En ese sentido, la misión recomendó la implementación urgente de canales de comunicación entre la Junta Nominadora y la sociedad hondureña, para mantener informada a ésta acerca del procedimiento y sus avances y asimismo, para que el ciudadano común tenga la posibilidad de hacer llegar a la Junta Nominadora sus denuncias, quejas o formular las observaciones o sugerencias que considere pertinentes. La implementación de una página web con las hojas de vida de los candidatos así como los criterios que la Junta Nominadora tendrá en cuenta para evaluar a los candidatos debería ser parte del contenido de esta página.

Asimismo, y en relación a los criterios de evaluación, se sugirió que estos no se limitaran a la educación y experiencia laboral sino que se buscara determinar las capacidades jurídicas del candidato, así como su posición ideológica, filosófica y ética frente a algunos temas de trascendencia para el país. En ese sentido, se recomendó la implementación de audiencias públicas que servirían para poder plantear a los candidatos estas preguntas y que a la vez el pueblo hondureño pudiera saber –a través de las respuestas de los candidatos- la aptitud de estos para asumir tan alto cargo. Para mayor ilustración se compartió con los miembros de la Junta Nominadora algunas lecciones aprendidas de experiencias similares en otros países de la región.

Cabe resaltar que los medios de comunicación juegan un rol fundamental en la promoción del estado de derecho y la difusión de una cultura de la legalidad. Por esa razón, resulta preocupante ver que solo algunos medios de comunicación se interesan y abordan de manera seria el desarrollo de

este proceso, en contraste con una gran apatía por parte de los principales medios de comunicación tanto televisiva como escrita.

La misión tomó conocimiento además del clima de temor que se está viviendo en el país, con un alto número de abogados asesinados en lo que va del año y el atentado contra su vida que sufrió un fiscal de San Pedro Sula hace solo unas semanas. Asimismo, y como se menciona en el comunicado de prensa elaborado al final de la misión, resulta muy preocupante la información recibida en torno a las posibles influencias de grupos ilegales, aparatos clandestinos de seguridad, crimen organizado y narcotráfico en el proceso de selección de magistrados.

Finalmente, la misión resaltó la apertura e interés de muchos sectores y actores de la sociedad hondureña en este proceso de selección e invita a la comunidad internacional a involucrarse un poco más y promover un proceso transparente que lleve a la elección de los candidatos que cumplan con el perfil que una Corte Suprema necesita.

English version

From September 29 to October 3, 2008, Katya Salazar, Programs Director of DPLF, was part of an international mission organized by the International Commission of Jurists (Geneva) sent to Honduras to observe the selection process of the new members of the Honduran Supreme Court. In addition to Ms. Salazar, members of the Mission included: Eduardo Cifuentes, ex president of the Constitutional Court of Colombia, ex Ombudsman of Colombia and current Dean of the University of the Andes Law School; Thomas Roerdam, Magistrate of the Supreme Court of Denmark; and Ramon Cadena, Director of the ICJ's office in Central America.

The selection process for the new members of the Supreme Court of Honduras is *sui generis*, since it incorporates participation of various sectors of civil society. The selection process includes the drawing up of nomination lists by seven "Proposing Entities" each representing: the Supreme Court of Honduras, civil society, the Honduras Bar Association, private enterprise, law faculties, labor unions, and the National Commissioner of Human Rights (National Ombudsman). Each of these entities nominates twenty (20) candidates and submits their list to a "Nominating Panel."

The Nominating Panel (made up of 7 members, each representing one of the nominating entities) will then scrutinize the qualifications of each nominee submitted on the 7 nomination lists (140 total), as well as any “self-nominated” candidates². The Nominating Panel then selects 45 of these candidates to be included in a nomination list submitted to Congress. From this list, the National Congress selects the new 15 Supreme Court members. The same law creating this selection process specifies how the Supreme Court nominees, as well as the Nominating Panel members, should be selected and the dates on which each list should be submitted.

While the Mission recognized the positive aspects of the selection mechanism designed by the Honduran legislature, in particular the integration of various groups from the Honduran society in the selection process of the members of the highest judicial body in the country, they received information from multiple sources about alleged irregularities in the elaboration of certain lists, and information concerning alleged political influence, which if true, only serves to undermine the selection process. The Mission also verified a widespread distrust in the selection process, and more specifically, a belief that the candidate lists are a result of political and powerful interest groups interferences.

Furthermore, the Mission also noted that the Nominating Panel had not enacted any internal regulations to address multiple procedural and substantive issues that were not discussed in the law. This oversight is of even more concern in view of the ever nearing deadlines –and reduced Congressional review time-- established by the law. The Nominating Panel must submit its list of 45 nominees to Congress by January 23rd, who in turn has only until January 25th to name the 15 new members of the Supreme Court. The Mission strongly urged members of the Nominating Panel to address these issues as soon as possible.

The mission also recommended that the Nominating Panel urgently adopt a communications strategy designed to inform the public of all developments in the selection process. Furthermore, they suggested that the communication strategy include a forum for the public to voice their concerns, suggestions, or ideas that it might be considered pertinent to the selection process. They

² This is a possibility recognized by the Constitution of Honduras and as of October 9, 2008, the last day to nominate through this mechanism, the Nominating Panel informed that they had received a total of 109 self-nominated persons interested in a position.

also recommended the creation of a web page, which would include the curriculum vitae of each candidate and the selection criteria adopted by the Nominating Panel.

The Mission also suggested that the Nominating Panel not limit selection criteria to the candidate's educational background and professional experiences, but seek a way to determine each candidate's legal skills, as well as philosophical, ideological and ethical positions on certain current transcendental issues in the country. It was further recommended that the Nominating Panel hold public hearings with the candidates to discuss their qualifications and positions on these issues, allowing for a transparent evaluation -by the Nominating Panel as well as the people of Honduras-- of each candidate's competency to hold such an important national position. In order to illustrate how this would work, Mission members shared similar public hearing experiences from other Latin American countries with the members of the Nominating Panel.

Of equal importance, and worth underscoring here, is the fundamental role played by the media in promoting the rule of law and disseminating a culture of law. For this reason, it is worrisome that only a limited number of Honduran media outlets are covering the selection process in any serious manner. It is troublesome to see the apathy exhibited by many important both Honduras' print and television media outlets at this pivotal time in the selection process of their country's highest judicial authorities.

The Mission also noted the rise in violence against legal professionals in Honduras, such as the high number of lawyers murdered so far this year, and the recent attempted murder of a District Attorney in San Pedro Sula. The Mission views especially troubling information received suggesting possible influence by members of organized crime, drug rings, and clandestine security forces in the Supreme Court selection process.

Finally, the Mission recognized the interest expressed by, and opening up of, many key actors and groups within the Honduran society towards the selection process and invites the international community to become more involved and to promote a transparent process that leads to the election of Justices with the stature required by a Supreme Court.